



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, 11/09/2020

Radicado:	08-001-33-33-014-2020-00149-00.
Medio de control:	Protección de los Derechos e Intereses Colectivos.
Demandante:	ELSA CECILIA OLMOS MOVILLA, AIDEE ARIAS DE AMAYA, BERTA TERESA MORA DE NAVARRO, ALTAGRACIA MARIA OROZCO DIAZ Y RAUL VILLALBA ROMERO.
Demandada:	Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Juez:	Guillermo Osorio Afanador.

INFORME
Señor Juez, paso a su despacho el expediente de la referencia, asignada a este juzgado previa formalidad de reparto a fin de que provea acerca de su eventual admisión.

PASA AL DESPACHO
1 cuaderno con 97 folios.

CONSTANCIA
Demanda que consta de 11 folios.

ALBERTO OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Último Digitalizado número cuaderno	Folio y de	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, once (11) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Radicado:	08-001-33-33-014-2020-00149-00.
Medio de control:	Protección de los Derechos e Intereses Colectivos.
Demandante:	ELSA CECILIA OLMOS MOVILLA, AIDEE ARIAS DE AMAYA, BERTA TERESA MORA DE NAVARRO, ALTAGRACIA MARIA OROZCO DIAZ Y RAUL VILLALBA ROMERO.
Demandada:	Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Juez:	Guillermo Osorio Afanador.

CONSIDERACIONES

Conforme al informe precedente, efectivamente las señoras **ELSA CECILIA OLMOS MOVILLA, AIDEE ARIAS DE AMAYA, BERTA TERESA MORA DE NAVARRO, ALTAGRACIA MARIA OROZCO DIAZ** y el señor **RAUL VILLALBA ROMERO.**, quienes actúan por intermedio de apoderada judicial, con fundamento en el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, instauraron demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y, por la presunta vulneración o amenaza de los derechos colectivos, con ocasión del no pago de una prima convencional a pensionados de Distrito de Barranquilla y de la extinta Empresas Públicas Municipales E.P.M.

Este Despacho es competente para conocer del presente medio de control de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 472 de 1998 y el numeral 10° del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por haber sido instaurada en contra de autoridades del orden distrital, y en atención a que la ocurrencia de los hechos tiene lugar en el Distrito de Barranquilla (Atlántico).

La Ley 472 de 1998 fue expedida en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 88, a través del cual se ordenó regular las acciones populares y de grupo. En dicha regulación, en cuanto a las acciones populares, se precisó y desarrolló su finalidad, objeto y procedimiento, de lo cual se ocupa el Título II de la Ley.

Se establece que la acción popular es el medio procesal dirigido a la protección de los derechos e intereses colectivos y que procede contra toda acción u omisión de particulares o de autoridades públicas que amenacen, vulneren o hayan vulnerado estos derechos, arts. 2° y 9°. Puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, a nombre propio o mediante apoderado arts. 12° y 13° y, cuando las actuaciones vulnerantes provienen de autoridades públicas o de personas privadas que desempeñen funciones administrativas, su conocimiento está en manos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de lo contrario el juez competente es el juez ordinario civil artículo 15o.

Dentro de este contexto, el artículo 18 Ibídem, establece los requisitos de la demanda de acción popular, los que han sido considerados por la jurisprudencia como de estricto cumplimiento y que, de no atenderse, traen como consecuencia la inadmisión de la misma, ello en la medida que contiene el mínimo necesario para que el juez constitucional pueda tener un conocimiento base, sobre la posible amenaza o vulneración de los derechos colectivos que se pretende amparar. Dicho artículo establece lo siguiente:

“[...] Art. 18-. Requisitos de la demanda o petición. Para promover una acción popular se presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos:
a) La indicación del derecho o interés colectivo vulnerado o amenazado;

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

- b) La indicación de los hechos, actos acciones u omisiones que motivan su petición;
- c) La enunciación de las pretensiones;
- d) La indicación de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;
- e) Las pruebas que pretenda hacer valer;
- f) Las direcciones para notificaciones;
- g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción.

La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el demandado [...].”

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, que no deben ser analizados de manera aislada sino en conjunto, la Ley 472 en su artículo 20 inciso 2º, expresamente le ordena al juez qué debe hacer cuando se presenta una demanda de acción popular sin alguna de las anteriores exigencias, de acuerdo con lo cual, ésta se debe inadmitir con la precisión de cuáles fueron los defectos de que adolece la demanda, bajo la advertencia de que si los mismos no son subsanados en el término de tres (3) días, aquella será rechazada.

Seguidamente a definirla, la misma norma dispuso una serie de artículos tendientes a señalar el trámite que debe impartirse a este tipo de acciones y específicamente en su artículo 20 dispuso lo siguiente:

"ARTICULO 20. ADMISION DE LA DEMANDA. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la demanda o petición inicial, el juez competente se pronunciará sobre su admisión. Inadmitirá la demanda que no cumpla con los requisitos señalados en esta ley. precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el término de tres (3) días. Si éste no lo hiciere, el juez la rechazará."

Respecto del requisito previsto en el literal a) del artículo 18 de la ley 472 de 1998, es del caso señalar que el accionante no indica claramente el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado, para mayor ilustración el artículo 4º de la mencionada ley, señala cuales son los derechos colectivos, sin embargo, lo expuesto por la parte accionada no guarda relación con alguno de los que ahí se enuncian. Por lo cual deberá subsanar esta falencia indicando con claridad el derecho colectivo amenazado o vulnerado.

En relación con lo preceptuado en el literal b) del artículo 18 de la ley 472 de 1998, esto es, *“b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición,”* se observa en la demanda una imprecisión y falta de claridad en la indicación de los hechos actos, acciones y omisiones, puesto que el demandante no orienta su narrativa para contextualizar y facilitar la comprensión de la ocurrencia de los hechos, que permita al Despacho tener un conocimiento base sobre la existencia de algún derecho colectivo amenazado o vulnerado, que estén relacionados y protegidos en alguna norma jurídica, en especial los que guarden relación con los asuntos señalados en el artículo 4º de la ley 427 de 1998 y en la Constitución Política, sino que narra la historia de tres pensionados, —y no la de los que representa la apoderada—, que hicieron una reclamación Administrativa a la Alcaldía Distrital por el no reconocimiento, ni pago de 15 días de prima de servicios convencionales, y que en respuesta el Alcalde del Distrito de Barranquilla, mediante Acto Administrativo 082011 de fecha 8 de Mayo de 2016 expresó a los Doctores Napoleón Sossa Garrido, Edgar Santodomingo Zarate Y Dubys Ramos Ramos, que no les adeudaban nada a los pensionados Distritales en general y en particular a los pensionados y jubilados de las E.P.M.

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Además la parte actora, hace alusión al Oficio QUILLA-18-069993 de fecha 24 de abril de 2018, concepto jurídico emitido por la Secretaria Jurídica del ente territorial que según los accionantes, está viciado de nulidad, en tanto hay falsa motivación y violación a la hermenéutica jurídica de la figura EX NUC y EX TUNC, y hay tergiversaciones en una serie de sentencias del Consejo de Estado, que citan.

Por lo anterior se deberá subsanar esta falencia, exponiendo los hechos, actos, acciones y omisiones que motivan la petición, con precisión y claridad, e igualmente tratando de cumplir con criterios de determinación, clasificación y numeración, a fin de facilitar la comprensión y establecer la coherencia con el presunto derecho colectivo amenazado o vulnerado y lo que se pretende con la presente acción.

El literal c) del artículo 18 de la ley 472 de 1998, exige la enunciación de las pretensiones. Si bien, la parte actora en su demanda, señala un acápite destinado a las pretensiones, en ella exige medidas cautelares y previas, sin precisar las pretensiones generales de la demanda, por lo cual deberá subsanar esta falencia, señalando de manera clara y precisa cuales son las pretensiones de la demanda, las cuales, por el medio de control que se invoca, deben guardar relación con el derecho colectivo amenazado o vulnerado, entendiendo por derecho colectivo lo que establece el artículo 4° de la ley 472 de 1998 y los que señala el capítulo III de la Constitución Política, y si a bien considera la parte accionante, solicitar además las medidas cautelares que señala el artículo 25 ibidem, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 229 y ss de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Al respecto el parágrafo del artículo 229 del CPACA señala:

“(…)

“Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad **la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos** del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio”.

Por otra parte, la demanda no reúne los requisitos previstos en el Decreto 806 del cuatro (04) de junio de dos mil veinte (2020), “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”,

Específicamente en el inciso 4° de su artículo 6°, que estipula:

“(…) En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.”

Sobre el particular, se advierte que, pese a que el actor indica la dirección electrónica de la entidad demandada, no acredita con el escrito el haber dado cumplimiento a lo estipulado por la norma trascrita, situación que está contemplada como causal de inadmisión



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

específica, en medio de los requerimientos actuales frente al uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

En consecuencia, dando cumplimiento a lo ordenado por el inciso 4° del artículo 6 del Decreto 806 del cuatro (04) de junio de dos mil veinte (2020), es del caso que se subsane la demanda, so pena de rechazo, de conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 472 de 1998. Del memorial y los anexos que se presenten para dar cumplimiento al requisito que se exige, se debe dar el mismo trámite enunciado en precedencia, conforme la reglamentación en cita.

Respecto del requisito de procedibilidad previsto en el inciso tercero del artículo 144 del CPACA, para acudir ante la jurisdicción administrativa en acción popular, dicha norma exige que previamente el actor haya solicitado a la autoridad administrativa adoptar las medidas necesarias para la protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado, y que transcurridos 15 días, la autoridad no haya atendido la reclamación o se niegue a hacerlo.

Revisada la demanda junto con los documentos allegados, se evidencia que no ha sido agotado este requisito de procedibilidad, si bien se aportan reclamaciones de otros pensionados con respecto a derechos laborales relacionados con la prima de servicios convencional que se aduce no le han cancelado a varios pensionados, los cuales a juicio de este Despacho no son derechos colectivos, los mencionados en la demanda como afectados, no han cumplido con el requisito de procedibilidad en el que den a conocer a la autoridad Distrital, algún derecho colectivo amenazado o vulnerado. Respecto del requisito de procedibilidad el Honorable Consejo de Estado en providencia de 5 de mayo de 2016, sostuvo:

“De lo anterior se infiere que al imponérsele esta obligación al administrado, el legislador pretendió que la reclamación ante la Administración fuese el primer escenario en el que se solicite la protección del derecho colectivo presuntamente violado, en aras a que, de ser posible, cese de manera inmediata la vulneración a tales derechos, de suerte que al Juez Constitucional se acuda solamente cuando la autoridad administrativa, a quien se le imputa la vulneración, no conteste o se niegue a ello.”¹

Así las cosas, al no haberse surtido el requisito previo, se ha negado la posibilidad de que las autoridades correspondientes atiendan la reclamación en sede administrativa, y en ejercicio de sus funciones adopten las medidas pertinentes para la protección de los derechos e intereses presuntamente conculcados. Por lo anterior deberán subsanar esta falencia.

En consecuencia, resulta imperativo inadmitir la demanda a fin de que se acredite en primera instancia el requisito de indicar el derecho colectivo amenazado o vulnerado, se subsanen las imprecisiones que se denotan en el relato de los hechos, actos, omisiones que fundamentan la petición, que se de claridad y precisión en la enunciación de las pretensiones, que al presentar la demanda, simultáneamente se envíe por medio electrónico copia de ella y de sus anexos al demandado como también del escrito de subsanación y finalmente, que se demuestre haber agotado el requisito de procedibilidad previo a la presentación de la demanda, que consiste en que previamente el actor haya solicitado a la autoridad administrativa adoptar las medidas necesarias para la protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado, pues sólo así puede advertirse su renuencia y justificarse la puesta en conocimiento del asunto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

¹ CONSEJO DE ESTADO; SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SECCION PRIMERA; Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES; Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016); Radicación número: 05001-23-33-000-2014-01613-01(AP)A



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Por lo anteriormente expuesto, se inadmitirá la demanda, concediéndole al actor popular el término de tres (3) días contemplado en el 2° inciso del artículo 20 de la Ley 472 de 1998, con el fin de que subsane las falencias mencionadas y acredite el cumplimiento de los referidos requisitos previos, so pena de rechazar la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,

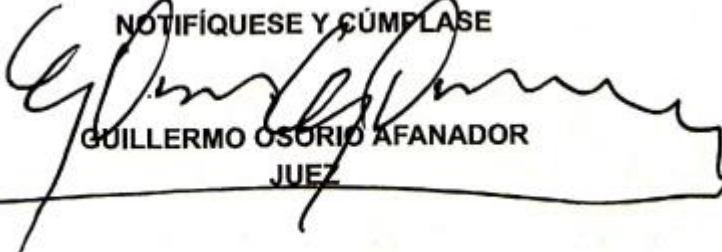
RESUELVE

PRIMERO.- Inadmitir la presente demanda que en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos instaurada por los señores **ELSA CECILIA OLMOS MOVILLA, AIDEE ARIAS DE AMAYA, BERTA TERESA MORA DE NAVARRO, ALTAGRACIA MARIA OROZCO DIAZ Y RAUL VILLALBA ROMERO**, contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO.- Conceder a la accionante el término improrrogable de tres (3) días siguientes a la notificación de esta decisión, para que subsane los defectos anotados en las consideraciones, so pena de rechazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la ley 472 de 1998.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada **DUBIS RAMOS RAMOS**, como apoderada de los accionantes en los términos del poder conferido (folios 12, 17, 21, 25 y 28).

CUARTO.- Notificar el presente auto por estado electrónico, de la forma prevista en el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO

N° 101 DE HOY 14/09/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA